

24ª REUNION — 15ª SESION ORDINARIA — 18 DE SEPTIEMBRE DE 1985

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor EDISON OTERO  
y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,  
doctor CARLOS E. GÓMEZ CENTURIÓN

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretario: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE

PERSONALIDADES INVITADAS:

Señor ex presidente y actual senador vitalicio de la República de Venezuela, doctor Luis Herrera Campins.  
Señor embajador de la República de Venezuela, en la Argentina, doctor Nicomedes Zuloaga.  
Señor ex ministro de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela, doctor José Alberto Zambrano Velazco.  
Señor ex embajador de la República de Venezuela, en la Argentina, doctor Jorge Dager.

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.  
AMOEDO, Julio A.  
BENITEZ, Alfredo L.  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
BRITOS, Oraldo N.  
CASTRO, Jorge A.  
CELLI, Felipe  
CONCHEZ, Pedro A.  
DE LA RUA, Fernando  
FALSONE, José A.  
FERIS, Gabriel  
GASS, Adolfo  
GIL, Francisco  
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.  
GURDULICH de CORREA, Liliana I.  
JIMÉNEZ MONTILIA, Arturo

LEON, Luis A.  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
MARINI, Celestino A.  
MARTIARENA, José H.  
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.  
MAUIHUM, Fernando H.  
MAZZUCCO, Faustino M.  
MENEM, Eduardo  
MURGUIA, Edgardo P. V.  
NAPOLI, Antonio O.  
NIEVES, Rogelio J.  
OTERO, Edison  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.  
SAADI, Vicente L.  
SALIM, Luis  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SAPAC, Elías  
SIGAL, Humberto G.  
SOLANA, Jorge D.  
TRILLA, Juan  
VELÁZQUEZ, Héctor J.  
VIDAL, Manuel D.  
VILLADA, Francisco R.  
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, CON AVISO:

LAFFERRIÈRE, Ricardo E.  
LECONTE, Ricardo G.

## SUMARIO

1. —A pedido de los señores senadores Nápoli y Amoe-  
do se resuelve invitar a ingresar al recinto al ex  
presidente de Venezuela y actual senador vitalicio  
doctor Luis Herrera Campins y a su comitiva. Dis-  
cursos. (Pág. 2232.)
2. —Homenajes a la memoria de Domingo Faustino  
Sarmiento y del doctor Luis L. Etchevehere, ex  
senador de la Nación. (Pág. 2244.)
3. —Asuntos entrados:
  - I. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que  
se solicita acuerdo. (Pág. 2247.)
  - II. Comunicación de un señor senador. (Pá-  
gina 2247.)
  - III. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2247.)
  - IV. Proyecto de ley de los señores senadores  
Sapag y Solana sobre coparticipación fe-  
deral. (Pág. 2248.)
  - V. Proyecto de comunicación del señor se-  
nador Murguía por el que se solicita la  
restitución a YPF de las compensaciones  
de mayores costos, derivadas del decreto  
2.227/80. (Pág. 2255.)
  - VI. Proyecto de comunicación de los señores  
senadores Gómez Centurión y Gil por el  
que se solicita la revisión de una medida  
dictada por el Instituto Nacional de Viti-  
vinicultura acerca de la edulcoración de  
vinos. (Pág. 2256.)
  - VII. Proyecto de ley del señor senador Saadi  
y otros señores senadores por el que se  
constituye el Consejo Federal de Infor-  
mática (COFEIN). (Pág. 2257.)
  - VIII. Proyecto de ley del señor senador Le-  
conte por el que se sustituye el título III,  
libro segundo, y el artículo 118 del Có-  
digo Penal. (Pág. 2258.)
  - IX. Proyecto de declaración del señor senador  
Britos y otros señores senadores por el  
que se manifiesta desacuerdo con expre-  
siones del presidente de la Nación res-  
pecto del deterioro salarial. (Pág. 2259.)
  - X. Proyecto de ley del señor senador Ber-  
hongaray y otros señores senadores refe-  
rente a la regularización impositiva de  
mercaderías de importación temporaria  
por la firma Cogasco S. A. y eximición de  
derechos de importación a la provincia  
de La Pampa. (Pág. 2260.)
  - XI. Proyecto de declaración del señor senador  
Gass por el que se adhiere a la conme-  
moración del cuadragésimo aniversario de  
la creación de la Organización de las Na-  
ciones Unidas. (Pág. 2261.)
  - XII. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Defensores López Ma-  
riño, de la provincia de Tucumán. (Pá-  
gina 2261.)
  - XIII. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Atlético Piedrabuena,  
de la provincia de Tucumán. (Pág. 2262.)
  - XIV. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Atlético Taruca Pampa,  
provincia de Tucumán. (Pág. 2262.)
  - XV. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Unión del Norte, de Bu-  
rruyacú, Tucumán. (Pág. 2262.)
  - XVI. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Defensores de Boca  
Juniors, de El Tímbó, Tucumán (Pá-  
gina 2263.)
  - XVII. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Sportivo El Chañar, de la  
Ramada, Tucumán. (Pág. 2263.)
  - XVIII. Proyecto de ley del señor senador Jiménez  
Montilla por el que se otorga un  
subsidio al Club Sportivo El Chañar, de la  
provincia de Tucumán. (Pág. 2263.)
  - XIX. Proyecto de comunicación del señor se-  
nador Jiménez Montilla referente a la  
construcción de un puente carretero so-  
bre el río Famaillá, Tucumán. (Pá-  
gina 2263.)
  - XX. Proyecto de comunicación del señor se-  
nador Jiménez Montilla por el que se so-  
licita la pavimentación de un tramo de  
la ruta nacional 34, en la provincia  
de Tucumán. (Pág. 2264.)
  - XXI. Proyecto de comunicación del señor se-  
nador Jiménez Montilla por el que se  
solicita la pavimentación de los tramos  
de acceso y salida de la localidad de La  
Ramada, Tucumán. (Pág. 2264.)
  - XXII. Proyecto de comunicación del señor se-  
nador Jiménez Montilla referente a la  
provisión de una ambulancia a la Mutua-  
lidad Provincial de Tucumán. (Pág. 2264.)
  - XXIII. Proyecto de comunicación del señor se-  
nador Jiménez Montilla referente a la  
provisión de ambulancias a la Municipa-  
lidad de la Banda del Río Salí, Tucumán.  
(Pág. 2265.)

- XXIV. Proyecto de ley del señor senador Jiménez Montilla por el que se otorga un subsidio al Colegio San Luis Gonzaga, de San Miguel de Tucumán. (Pág. 2265.)
- XXV. Proyecto de ley del señor senador Jiménez Montilla por el que se otorga un subsidio al Instituto de Enseñanza María Montessorio, de San Miguel de Tucumán. (Pág. 2265.)
- XXVI. Proyecto de comunicación del señor senador Jiménez Montilla, acerca de la rehabilitación de una estafeta en Burruyacú, Tucumán. (Pág. 2265.)
- XXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Jiménez Montilla referente a la donación de rieles y durmientes a la provincia de Tucumán. (Pág. 2266.)
- XXVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Jiménez Montilla por el que se solicita la habilitación del aeropuerto internacional Teniente Benjamín Matienzo, en Tucumán. (Pág. 2266.)
- 4.—Moción de preferencia formulada por el señor senador Britos para considerar en la sesión de mañana el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Transportes en el proyecto de ley en revisión sobre derogación de la ley de facto 22.337, que sustituye el artículo 14 del Estatuto del Periodista Profesional. Se aprueba. (Página 2266.)
- 5.—Moción de preferencia formulada por el señor senador Gómez Centurión para considerar en la sesión de mañana el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Centurión y Gil por el que se solicita la suspensión de una medida dictada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre edulcoración de vinos. Se aprueba. (Página 2267.)
- 6.—Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en el proyecto de ley, en segunda revisión, sobre los regímenes de patria potestad y de filiación. Se aprueba parcialmente modificado. (Pág. 2267.)
- 7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor senador Gass por el que se declara monumento histórico nacional a la finca La Elvira, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Se aprueba. (Pág. 2293.)
- 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el ingreso de la República Argentina a la Corporación Interamericana de Inversiones. Se aprueba. (Pág. 2296.)
- 9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República Argentina Democrática y Popular. Se aprueba. (Pág. 2307.)
- 10.—Moción formulada por el señor senador Nápoli de postergar la consideración del dictamen de las comisiones de Economía y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicita convertir en intervención la liquidación del Banco Unicor Cooperativo Limitado. Se aprueba. (Pág. 2310.)
- 11.—Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se envían antecedentes del decreto 818/84 por el cual se convoca en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal al señor Juan Poli. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2311.)
- 12.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se envían antecedentes del decreto 1.287/84 por el que se convoca a servicio activo y se promueve al señor Luciano Engrassi. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2312.)
- 13.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la cual se remiten antecedentes del decreto 1.329/84 por el que se acepta el recurso jerárquico interpuesto por el señor Roberto Pettinato. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2313.)
- 14.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se remiten antecedentes del decreto 1.632/84 por el cual se convoca en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal al doctor Agustín Mario Rubén Bartomeo. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2315.)
- 15.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se envían antecedentes del decreto 3.649/84 por el cual se fijan remuneraciones adicionales para el personal del Sistema Bancario Oficial. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2316.)
- 16.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asun-

tos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se envían antecedentes del decreto 3.546/84 por el que se autoriza el pago a cinco agentes del Comando en Jefe del Ejército. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2317.)

17.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se envían antecedentes del decreto 3.548/84 por el que se hace lugar al pago de indexaciones sobre retroactividades ya percibidas. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2318.)

18.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Complementario en Materia de Planificación Económica y Social entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2320.)

19.—Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación del señor senador de la Rúa por el que se solicita que se declare de interés nacional el IV Encuentro Panamericano y XIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. Se aprueba. (Pág. 2322.)

20.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se insiste en el cumplimiento de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2323.)

21.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se insiste en el cumplimiento de una resolución del Ministerio del Interior. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2324.)

22.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se envían antecedentes que dieron lugar al decreto 3.244 por el que se dispuso insistir en el cumplimiento de una resolución del Ministerio del Interior. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2325.)

23.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comu-

nicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se insiste en el cumplimiento de una resolución del Ministerio del Interior. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2326.)

24.—Consideración del dictamen de las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en la comunicación del Tribunal de Cuentas de la Nación por la que se insiste en el cumplimiento de una resolución emanada del ex Ministerio de Bienestar Social. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2327.)

25.—Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la comunicación de los señores senadores Nieves y Celli y de los señores diputados Romano, Blanco y González por la que se hace saber la imposibilidad para esa comisión de expedirse respecto de la cuenta general, ejercicio 1984. Se aprueba. (Pág. 2328.)

26.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2329.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 41 del miércoles 18 de septiembre de 1985:

Sr. Presidente (Otero). —Queda abierta la sesión.

# I

## RECEPCION Y DISCURSOS

Sr. Nápoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: en conocimiento de la presencia en la casa del señor el presidente y actual senador vitalicio de la República de Venezuela, doctor Luis Herrera Campins, solicito que se lo invite a ingresar al recinto.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Otero). — Con el asentimiento del cuerpo, invito a los señores presidentes de bloque a constituirse en comisión de recepción para acompañar al ex presidente de la República de Venezuela y actual senador vitalicio, doctor Luis Herrera Campins, a este recinto desde el salón de lectura.

Sr. Amoedo. — Pido que se haga extensiva la invitación al señor embajador de la República de Venezuela, que acompaña al ex presidente

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Deseo solicitar que este dictamen sea tratado con preferencia en la sesión de mañana.

**Sr. Presidente (Otero).** — En consideración la moción formulada por el señor senador por San Luis. Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

**Sr. Nápoli.** — Quiero apoyar la petición formulada por el señor senador por San Luis, en el sentido de que este dictamen sea tratado con preferencia en el día de mañana.

**Sr. Presidente (Otero).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Otero).** — Queda aprobada la preferencia.

## 5

### MOCION DE PREFERENCIA

**Sr. Presidente (Otero).** — También ha quedado reservado el proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Centurión y Gil, por el que se solicita la suspensión de una medida dictada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre edulcoración de vinos.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. Gómez Centurión.** — Se trata de un asunto de suma importancia que afectará a las provincias productoras de vino. Una reciente resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura perjudica notablemente a San Juan, Río Negro y Salta. Por ese motivo, solicito que el proyecto de comunicación se trate con preferencia en la sesión de mañana, con dictamen de comisión o sin él.

**Sr. Presidente (Otero).** — En consideración la moción formulada por el señor senador por San Juan.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

**Sr. Nápoli.** — Nuestro bloque apoya la petición del señor senador por San Juan para que este proyecto de comunicación sea tratado con preferencia en la sesión de mañana.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Nuestro bloque adhiere a la moción formulada.

**Sr. Presidente (Otero).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Otero).** — Queda aprobada la preferencia.

**Sr. Brasesco.** — Que conste que fue aprobada por unanimidad.

**Sr. Presidente (Otero).** — Quedará constancia, señor senador.

—Ocupa la presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Carlos E. Gómez Centurión.

## 6

### PATRIA POTESTAD Y FILIACION

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad en el proyecto de ley devuelto con modificaciones por la Honorable Cámara de Diputados, sobre los regímenes de patria potestad y de filiación.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*):

#### Dictamen de las comisiones

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en su sesión de fecha 28 de marzo de 1985, en los proyectos de ley que les fueran pasados en revisión con fechas 5 y 26 de septiembre de 1984, referidos a los regímenes de patria potestad y filiación, respectivamente; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan:

1º — Rechazar la modificación introducida al artículo 274 del Código Civil.

2º — Insistir en su sanción como Cámara de origen, respecto de lo siguiente:

Código Civil: artículos 242, 245, 253, 258, 264, 264 bis, 264 ter, 264 quater, 294, 297, 306, 307, 3.593 y 3.594.

Ley 2.393: artículo 10.

Ley 22.278: artículo 7º.

3º — Aceptar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en relación a:

Código Civil: artículos 77, 131, 149, 240, 241, 243, 246, 247, 249, 251, 254, 255, 265, 266, 267, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 282, 284, 286, 287, 290, 293, 303, 308, 309, 310, 389, 390, 391, 392, 478, 1.114 y 3.545.

Ley 10.903: artículo 13.

Ley 18.248: artículo 2º.

Código de Comercio: artículos 11, inciso 1º, y 12.

Quedando en consecuencia sancionado de la siguiente forma:

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Sustitúyense los artículos 77, 131 y 149 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 77. — El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

Artículo 131. — Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieren casado sin autorización no tendrán, hasta los veintiún años, la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación.

Los menores que hubieren cumplido 18 años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si se encontraran bajo tutela, podrá el juez habilitarlos a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la actitud de éste. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro.

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del ministerio pupilar.

Artículo 149. — Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

Art. 2º — Sustitúyese el título II de la sección II del libro I del Código Civil (artículos 240 al 263) por las siguientes disposiciones:

#### TÍTULO II

#### DE LA FILIACION

#### CAPÍTULO I

##### *Disposiciones generales*

Artículo 240. — La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código.

Artículo 241. — El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada plenamente.

#### CAPÍTULO II

##### *Determinación de la maternidad*

Artículo 242. — La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo. Esta inscripción deberá serle notificada a la madre salvo su reconocimiento expreso o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

#### CAPÍTULO III

##### *Determinación de la paternidad matrimonial*

Artículo 243. — Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación, divorcio o a la separación de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.

Artículo 244. — Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.

Artículo 245. — Aun faltando la presunción de la paternidad del marido en razón de la separación legal o de hecho de los esposos, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

#### CAPÍTULO IV

##### *Determinación y prueba de la filiación matrimonial*

Artículo 246. — La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

1º Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los

padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.

2º Por sentencia firme en juicio de filiación.

#### CAPÍTULO V

##### *Determinación de la paternidad extramatrimonial*

Artículo 247. — La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

#### CAPÍTULO VI

##### *Del reconocimiento de la filiación*

Artículo 248. — El reconocimiento del hijo resultará:

- 1º De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente.
- 2º De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido.
- 3º De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental.

Lo prescrito en el presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la inscripción prevista en el artículo 242.

Artículo 249. — El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama.

Artículo 250. — En el acto de reconocimiento, es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la filiación establecida.

#### CAPÍTULO VII

##### *Las acciones de filiación*

##### DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 251. — El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción.

Artículo 252. — Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última.

Artículo 253. — En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

#### CAPÍTULO VIII

##### *Acciones de reclamación de estado*

Artículo 254. — Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres si ella no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

En este caso la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo.

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

Artículo 255. — En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

Artículo 256. — La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

Artículo 257. — El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario.

#### CAPÍTULO IX

##### *Acciones de impugnación de estado*

Artículo 258. — El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o anulación, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley



no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre. Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción fuese rechazada.

En todos los casos del presente artículo, para la admisión de la demanda se deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se funda.

Artículo 259. — La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcorre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.

Artículo 260. — El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada. Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258.

Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de un año.

Artículo 261. — La maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.

Artículo 262. — La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo.

Artículo 263. — El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

Art. 3º — Sustitúyese la denominación del título III de la sección II del libro primero del Código Civil, por la siguiente:

### TITULO III

#### *De la autoridad de los padres*

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 264, por los siguientes:

Artículo 264. — La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Su ejercicio corresponde:

- 1º En el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre conjuntamente, en tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 quater, o cuando mediare expresa oposición.
- 2º En caso de separación de hecho, divorcio o nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación.
- 3º En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro.
- 4º En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los padres, a aquel que lo hubiere reconocido.
- 5º En el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, a ambos, si convivieren, y en caso contrario a aquel que tenga la guarda otorgada en forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria.
- 6º A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo, si no hubiese sido voluntariamente reconocido.

Sanciónase como artículo 264 bis el siguiente:

Artículo 264 bis. — Cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad.

Sanciónase como artículo 264 ter el siguiente:

Artículo 264 ter. — En caso de desacuerdo entre el padre y la madre, cualquiera de ellos podrá acu-



dir al juez competente, quien resolverá lo más conveniente para el interés del hijo, por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los padres con intervención del ministerio pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria, y oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

Sanciónase como artículo 264 quater el siguiente:

Artículo 264 quater. — En los casos de los incisos 1º, 2º y 5º del artículo 264 se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para los siguientes actos:

- 1º Autorizar al hijo para contraer matrimonio.
- 2º Habilitarlo.
- 3º Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.
- 4º Autorizarlo para salir de la República.
- 5º Autorizarlo para estar en juicio.
- 6º Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial.
- 7º Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el artículo 294.

En todos estos casos, si uno de los padres no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para presarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.

Art. 4º — Sustitúyense los artículos 265, 266, 267, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 367, 368 y 373 por los siguientes:

Artículo 265. — Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.

Artículo 266. — Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados, están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios.

Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilio los demás ascendientes.

Artículo 267. — La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Artículo 269. — Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser atendida por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos.

Artículo 271. — En caso de divorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

Artículo 272. — Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores.

Artículo 275. — Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos les hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.

Tampoco pueden, antes de haber cumplido 18 años de edad, ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.

Artículo 276. — Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieran.

Artículo 277. — Los padres pueden exigir que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

Artículo 278. — Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

Artículo 282. — Si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

Artículo 283. — Se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o sólo el usufructo, no tuvieran los padres.

Artículo 284. — Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan las necesidades que padecieren.

Artículo 285. — Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

Artículo 286. — El menor adulto no precisará la autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar.

Artículo 287. — El padre y la madre tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:

1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.
2. Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponde al hijo.

Artículo 290. — Es implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos menores, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

Artículo 293. — Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:

1. Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
2. Los adquiridos por herencia, legado o donación cuando hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

Artículo 294. — La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por el padre o la madre.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

Artículo 295. — La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no los priva del derecho al usufructo.

Artículo 297. — Los padres no pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público; ni constituirse cesionario de créditos, derechos o acciones contra sus hijos; ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios; ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos, constituir sobre ellos derechos reales o transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros.

Artículo 298. — Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar ganados de cualquier clase que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de los rebaños.

Artículo 303. — Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un tutor especial y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes, después de satisfechos los gastos de administración y de alimentos y educación de los hijos.

Agrégase al artículo 306 el siguiente inciso:

- 5º Por la adopción de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción.

Artículo 307. — El padre o madre quedan privados de la patria potestad:

- 1º Por ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes de alguno de sus hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo.
- 2º Por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero.
- 3º Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, conducta notoria o delincuencia.

Artículo 308. — La privación de la autoridad de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraran que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en beneficio o interés de los hijos.

Artículo 309. — El ejercicio de la autoridad de los padres queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres, judicialmente declarada conforme a los artículos 15 a 21 de la ley 14.394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno

de los padres, o de inhabilitación según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Artículo 310. — Perdida la autoridad por uno de los progenitores, o suspendido uno de ellos en su ejercicio, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, los menores quedarán bajo el patronato del Estado nacional o provincial.

Artículo 367. — Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:

- 1º Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.
- 2º Los hermanos y medio hermanos.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca.

Artículo 368. — Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado.

Artículo 373. — Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.

Art. 5º — Sustitúyese el Capítulo III, sección II, libro I, del Código Civil (artículos 389, 390 y 391) por las siguientes disposiciones:

### CAPÍTULO III

#### *De la tutela legal*

Artículo 389. — La tutela legal tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos, o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela, o dejan de ser tutores.

Artículo 390. — La tutela legal corresponde únicamente a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos.

Artículo 391. — El juez confirmará o dará la tutela legal a la persona que, por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

Art. 6º — Sustitúyense los artículos 392, 478 y 1.114 del Código Civil, por los siguientes:

Artículo 392. — Los jueces darán tutela al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela

legal, o cuando existiendo no sean capaces o idóneos o hayan hecho dimisión de la tutela, o hubiesen sido removidos de ella.

Artículo 478. — El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la curaduría.

Artículo 1.114. — El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.

Art. 7º — Sustitúyense los artículos 3.412, 3.545, 3.565, 3.567, 3.570, 3.571, 3.572, 3.576 y 3.585 del Código Civil, por los siguientes:

Artículo 3.412. — Los otros parientes llamados por la ley a la sucesión no pueden tomar la posesión de la herencia, sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión.

Artículo 3.545. — Las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. No habiendo sucesores, los bienes corresponden al Estado nacional o provincial.

Artículo 3.565. — Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes iguales, salvo los derechos que en este título se dan al viudo o viuda sobreviviente.

Artículo 3.567. — A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge sobreviviente.

Artículo 3.570. — Si han quedado viudo o viuda e hijos, el cónyuge sobreviviente tendrá en la sucesión la misma parte que cada uno de los hijos.

Artículo 3.571. — Si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite, heredará éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al fallecido. La otra mitad la recibirán los ascendientes.

Artículo 3.572. — Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los cónyuges se heredan recíprocamente, excluyendo a todos los parientes colaterales.

Artículo 3.576. — En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes, no tendrá el cónyuge sobreviviente parte alguna en la división de bienes gananciales que correspondieran al cónyuge pre-fallecido.

Artículo 3.585. — No habiendo descendientes ni ascendientes ni viudo o viuda, heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el

cuarto grado inclusive, salvo el derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por partes iguales.

Art. 8º — Sustitúyese la denominación del capítulo I, título IX, sección primera del libro cuarto del Código Civil, por el siguiente:

#### CAPÍTULO I

##### *Sucesión de los descendientes*

Art. 9º — Sustitúyense los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil, por los siguientes:

Artículo 3.593. — La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador y de los que éste hubiere donado, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.570.

Artículo 3.594. — La legítima de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión y los donados, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3.571.

Art. 10. — Incorpórase como artículo 3.296 bis del Código Civil, el siguiente:

Artículo 3.296 bis. — Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna.

Art. 11. — Sustitúyese el artículo 10 de la ley 2.393, por el siguiente:

Artículo 10. — La mujer mayor de catorce años y el hombre de dieciséis años, pero menores de edad, aunque estén emancipados por habilitación de edad, no pueden casarse entre sí, ni con otra persona, sin el consentimiento de su padre y de su madre; o de aquel de ellos que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce, o en su defecto, sin el del juez. Los sordomudos, que no saben darse a entender por escrito, necesitan consentimiento del curador o autorización del juez.

Art. 12. — Sustitúyese el artículo 13 de la ley 10.903, por el siguiente:

Artículo 13. — La privación de la autoridad o la suspensión de su ejercicio, no importan liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del Código Civil si no fueran indigentes.

Art. 13 — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 19 de la ley 14.394 por el siguiente:

Artículo 19, inciso 3º. El padre o la madre.

Art. 14. — Sustitúyese el artículo 2º de la ley 18.248 por el siguiente:

Artículo 2º — El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elec-

ción corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo prescrito en el artículo 3º.

Art. 15. — Sustitúyese el párrafo segundo del artículo 2º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 2º, párrafo segundo: el adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 16. — Sustitúyese el artículo 6º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 6º — El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un año. Esta condición no se requiere cuando adopta al hijo o hijos de su cónyuge.

Art. 17. — Sustitúyense los artículos 11, inciso 1º, y 12 del Código de Comercio por los siguientes:

Artículo 11, inciso 1º — Conteniendo autorización expresa del padre y de la madre.

Artículo 12. — El hijo mayor de dieciocho años, que fuese asociado al comercio del padre o de la madre, o de ambos, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad.

La autorización otorgada no puede ser retirada al menor sino por el juez, a instancia del padre, de la madre, del tutor o ministerio pupilar, según el caso y previo conocimiento de causa. Este retiro, para surtir efecto contra terceros que no lo conocieren, deberá ser inscrito y publicado en el Tribunal de Comercio respectivo.

Art. 19. — Deróganse las siguientes disposiciones del Código Civil:

Artículo 273, 281, 289, 305, 311 al 344 (títulos IV y V de la sección II del libro I), 357, 358, 359, 365, 366, 369, 394 al 396, 402 (capítulo V, título VII, sección II, libro I), 3.577 al 3.584 (capítulos IV y V, título IX, sección I, libro IV), 3.596, 3.597, 4.029, 4.042 y 4.043.

Art. 20. — Derógase la ley 14.367.

Art. 21. — Sustitúyese el artículo 7º de la ley 22.278 por el siguiente:

Artículo 7º — Respecto de los padres, tutores o guardadores, de los menores a que se refieren los artículos 1º y 2º, el juez podrá declarar la privación de la patria potestad o la suspensión, o la privación de la tutela o guarda, según correspondiere.

Art. 22. — Siempre que en el Código Civil, leyes complementarias u otras disposiciones legales se aluda a los hijos naturales, extramatrimoniales o ilegítimos en contraposición o para discriminar derechos o deberes respecto a los hijos legítimos, la situación de aquéllos deberá ser equiparada a la de éstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 del Código Civil; y cuando en los mismos textos se aluda al padre en ejercicio de la patria potestad, deberá entenderse que tal ejercicio corresponderá en lo sucesivo a los padres conjuntamente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 264 y siguientes del Código Civil.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los términos del artículo 102 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 6 de septiembre de 1985.

*Alberto J. Rodríguez Saá. — Luis A. J. Brascosco. — Adolfo Gass. — Olijela del Valle Rivas. — Jorge A. Castro. — José A. Falsone. — Felipe Celli. — Margarita Malharro de Torres. — Vicente L. Saadi. — Liliana I. Gurdulich de Correa. — Antonio T. Berhongaray. — Oraldo N. Britos. — Juan Trilla.*

#### ANTECEDENTE

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación**  
(28 de marzo de 1985)

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Sustitúyense los artículos 77, 131 y 149 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 77. — El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

Artículo 131. — Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieren casado sin autorización no tendrán hasta los veintinueve años la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibieren a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación.

Los menores que hubieren cumplido 18 años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si se encontraran bajo tutela podrá el juez habilitarlos a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud de éste. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público, que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro.

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del ministerio pupilar.

Artículo 149. — Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

Art. 2º — Sustitúyese el título II de la sección II del libro I del Código Civil (artículos 240 a 263) por las siguientes disposiciones:

#### TÍTULO II

#### DE LA FILIACION

##### CAPÍTULO I

##### *Disposiciones generales*

Artículo 240. — La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este código.

Artículo 241. — El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada plenamente.

##### CAPÍTULO II

##### *Determinación de la maternidad*

Artículo 242. — La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo. En caso de manifiesta pobreza o marginalidad, el oficial público podrá aceptar la prueba testimonial de dos vecinos que hayan tenido conocimiento del embarazo y del parto. La inscripción deberá serle notificada a la madre en forma personal y auténtica, salvo su reconocimiento expreso o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

##### CAPÍTULO III

##### *Determinación de la paternidad matrimonial*

Artículo 243. — Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación, divorcio o a la separación de hecho de los esposos. No se presume la paternidad

del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.

Artículo 244. — Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.

Artículo 245. — En cualquier caso, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurriere el consentimiento de ambos.

#### CAPÍTULO IV

##### *Determinación y prueba de la filiación matrimonial*

Artículo 246. — La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

- 1º Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.
- 2º Por sentencia firme en juicio de filiación.

#### CAPÍTULO V

##### *Determinación de la paternidad extramatrimonial*

Artículo 247. — La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

#### CAPÍTULO VI

##### *Del reconocimiento de la filiación*

Artículo 248. — El reconocimiento del hijo resultará:

- 1º De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente.
- 2º De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido.
- 3º De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental.

Lo prescrito en el presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la inscripción prevista en el artículo 242.

Artículo 249. — El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales ni requiere aceptación del hijo.

El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama.

Artículo 250. — En el acto de reconocimiento, es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de impugnación de la filiación establecida.

#### CAPÍTULO VII

##### *Las acciones de filiación*

#### DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 251. — El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción.

Artículo 252. — Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última.

Artículo 253. — En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte. La negativa a someterse a pruebas biológicas será una presunción que admite prueba en contrario.

#### CAPÍTULO VIII

##### *Acciones de reclamación de estado*

Artículo 254. — Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres si ella no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En este caso la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo.

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz. Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

Artículo 255. — En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto, podrá promover la acción judicial correspondiente, si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

Artículo 256. — La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

Artículo 257. — El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario.

### CAPÍTULO IX

#### *Acciones de impugnación de estado*

Artículo 258. — El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, anulación, divorcio o separación de hecho, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre.

Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción fuese rechazada.

Artículo 259. — La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcorre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.

Artículo 260. — El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada.

Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258.

Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de un año.

Artículo 261. — La maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.

Artículo 262. — La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo.

Artículo 263. — El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

Art. 3º — Sustitúyese la denominación del título III de la sección II, del libro primero del Código Civil, por la siguiente:

### TÍTULO III

#### DE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 264 por los siguientes:

Artículo 264. — La autoridad de los padres o patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos, para su protección y formación integral, que se ejercerá siempre en beneficio de éstos, desde su concepción y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Ambos progenitores son titulares del ejercicio de la autoridad y se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 bis o cuando mediare oposición expresa.

Cuando los progenitores no convivan, el ejercicio de la autoridad corresponderá al padre o madre que ejerza la tenencia, sin perjuicio del derecho-deber del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación, salud y condiciones de vida. Sin embargo, se requerirá el consentimiento de ambos padres para los actos previstos en el artículo 264 bis. Si el progenitor que no ejerce la tenencia dedujera oposición a algún acto que ha dispuesto el otro en el ejercicio de la autoridad, resolverá el juez, como se establece en el primer párrafo del artículo 264 bis.

Artículo 264 bis. — En caso de disenso, oídos los padres y el menor adulto, resolverá el



juez sumariamente atendiendo a los intereses del hijo y a la unidad familiar, por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpeciere gravemente el ejercicio de la autoridad de los padres, el juez sumariamente podrá atribuirle a uno de los progenitores por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

El acuerdo expreso de ambos progenitores será necesario para los siguientes actos:

1. Autorización para contraer matrimonio.
2. Emancipación por habilitación de edad y su revocación.
3. Salida del territorio nacional.
4. Autorización para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, si fueran menores de dieciocho años.
5. Disposición de los bienes inmuebles, muebles y derechos registrables del menor.

En todos estos casos, si uno de los padres no diera su consentimiento, o mediare imposibilidad para traerlo, resolverá el juez lo que convenga al interés del menor y a la unidad familiar. Si mediare imposibilidad de hecho ostensible y excepcional para obtener el consentimiento de uno de los progenitores, acreditada por información sumaria ante el juez del lugar, será suficiente la autorización de quien tiene consigo al hijo.

Artículo 264 ter. — Los derechos inherentes a la autoridad de los padres no corresponden al progenitor que no haya reconocido voluntariamente al hijo, pero aquél queda sujeto a la prestación alimentaria y demás obligaciones derivadas de dicha autoridad.

En caso de muerte de uno de los progenitores, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la autoridad de los padres o suspensión de su ejercicio, corresponde al otro ejercerla en forma exclusiva. Cuando ambos progenitores sean incapaces o estén privados de la autoridad o suspendidos en su ejercicio, los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo fueren menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la autoridad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad, salvo que a petición de éste el juez le discierna el ejercicio de la autoridad.

Art. 5º — Sustitúyense los artículos 265, 266, 267, 268, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 367, 368 y 373 por los siguientes:

Artículo 265. — Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hi-

jos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.

Artículo 266. — Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios.

Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilio a los demás ascendientes.

Artículo 267. — La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Artículo 269. — Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser atendida por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos.

Artículo 271. — En caso de divorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

Artículo 272. — Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores.

Artículo 274. — Los padres, sin intervención de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados. Los menores serán oídos si tuvieren más de 18 años.

También a nombre de sus hijos menores, los padres podrán celebrar cualquier contrato, en los límites de su administración, señalados en este código.

Artículo 275. — Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos les hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.

Tampoco pueden, antes de haber cumplido 18 años de edad, ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.

Artículo 276. — Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerlos entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieran.

Artículo 277. — Los padres pueden exigir que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

Artículo 278. — Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos

menores. El poder de corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

Artículo 282. — Si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

Artículo 283. — Se presume que los menores adultos si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo, o sólo el usufructo, no tuvieren los padres.

Artículo 284. — Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar, o por la representación diplomática de la República según el caso, para contraer deudas que satisfagan las necesidades que padecieren.

Artículo 285. — Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

Artículo 286. — El menor adulto no precisará la autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar.

Artículo 287. — El padre y la madre tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:

- 1º Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.
- 2º Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
- 3º Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponda al hijo.

Artículo 290. — Es implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos menores, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

Artículo 293. — Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:

- 1º Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
- 2º Los adquiridos por herencia, legado o donación cuando hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

Artículo 294. — La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la autoridad. Se presumirá que los actos realizados por uno cuentan con el consentimiento del otro, salvo oposición expresa.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

Artículo 295. — La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no los priva del derecho al usufructo.

Artículo 297. — Los padres no pueden, ni aún con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público, ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra sus hijos, a menos que las cesiones resulten de una subrogación legal, ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios, ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para: enajenar los bienes registrables de sus hijos, las rentas que estén constituidas sobre la deuda nacional, constituir derechos reales sobre los bienes registrables, transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros y hacer remisión voluntaria de derechos de sus hijos.

Artículo 298. — Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar ganados de cualquier clase que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de los rebaños.

Artículo 303. — Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un tutor especial y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes después de satisfechos los gastos de administración y de alimentos y educación de los hijos.

Artículo 306. — La autoridad de los padres se acaba:

- 1º Por la muerte de los padres o de los hijos.
- 2º Por profesión de los padres o de los hijos, con autorización de aquéllos, en institutos monásticos.
- 3º Por llegar los hijos a la mayor edad.
- 4º Por emancipación legal de los hijos, sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización.
- 5º Por emancipación dativa de los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad.
- 6º Por dar en adopción los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción.

Artículo 307. — El padre o la madre, o ambos, quedarán privados de la autoridad en los siguientes supuestos:

- 1) Por ser condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices de un delito doloso contra la persona o los bienes de sus hijos o de alguno de ellos, o como autores, instigadores o cómplices de un delito cometido por sus hijos en forma conjunta o individual.
- 2) Por la exposición o el abandono malicioso que hicieron de sus hijos o de alguno de ellos, aun cuando éstos quedaren bajo guarda o fueren recogidos por el otro progenitor o un tercero.
- 3) Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica, o la moralidad de sus hijos, mediante malos tratos, ejemplos perniciosos, conducta notoria o delincuencia.

Artículo 308. — La privación de la autoridad de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraran que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en beneficio o interés de los hijos.

Artículo 309. — El ejercicio de la autoridad de los padres queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres, judicialmente declarada conforme a los artículos 15 a 21 de la ley 14.394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, o de inhabilitación según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Artículo 310. — Perdida la autoridad por uno de los progenitores, o suspendido uno de ellos en su ejercicio, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, los menores quedarán bajo el patronato del Estado nacional o provincial.

Artículo 367. — Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:

- 1) Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado, y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.
- 2) Los hermanos y medio hermanos.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca.

Artículo 368. — Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado.

Artículo 373. — Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.

Art. 6º — Sustitúyese el capítulo III, sección II, libro I del Código Civil (artículos 389, 390 y 391), por las siguientes disposiciones:

#### CAPITULO III

##### *De la tutela legal*

Artículo 389. — La tutela legal tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos, o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela o dejan de ser tutores.

Artículo 390. — La tutela legal corresponde únicamente a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos.

Artículo 391. — El juez confirmará o dará la tutela legal a la persona que por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

Art. 7º — Sustitúyense los artículos 392, 478 y 1.114 del Código Civil, por los siguientes:

Artículo 392. — Los jueces darán tutela al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legal, o cuando, existiendo, no sean capaces o idóneos, o hayan hecho dimisión de la tutela, o hubiesen sido removidos de ella.

Artículo 478. — El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad, que puedan desempeñar la curaduría.

Artículo 1.114. — El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por

sus hijos menores, que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.

Art. 8º — Sustitúyese los artículos 3.412, 3.545, 3.565, 3.567, 3.570, 3.571, 3.572, 3.576 y 3.585 del Código Civil, por los siguientes:

Artículo 3.412. — Los otros parientes llamados por la ley a la sucesión no pueden tomar la posesión de la herencia sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión.

Artículo 3.545. — Las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. No habiendo sucesores, los bienes corresponden al Estado nacional o provincial.

Artículo 3.565. — Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes iguales, salvo los derechos que en este título se dan al viudo o viuda sobreviviente.

Artículo 3.567. — A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge sobreviviente.

Artículo 3.570. — Si han quedado viudo o viuda e hijos, el cónyuge sobreviviente tendrá en la sucesión la misma parte que cada uno de los hijos.

Artículo 3.571. — Si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite, heredará éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al fallecido. La otra mitad la recibirán los ascendientes.

Artículo 3.572. — Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los cónyuges se heredan recíprocamente, excluyendo a todos los parientes colaterales.

Artículo 3.576. — En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes, no tendrá el cónyuge sobreviviente parte alguna en la división de bienes gananciales que correspondieran al cónyuge prefallecido.

Artículo 3.585. — No habiendo descendientes ni ascendientes, ni viudo o viuda, heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado inclusive, salvo el derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por partes iguales.

Art. 9º — Sustitúyese la denominación del capítulo I, título IX, sección I del libro IV del Código Civil por la siguiente:

## CAPÍTULO I

### *Sucesión de los descendientes*

Art. 10. — Sustitúyense los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 3.593. — La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador, de los que éste hubiera donado a terceros y de los que deban colacionarse a la masa de la herencia, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.570.

Artículo 3.594. — La legítima de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión, de los que deban colacionarse a la masa de la herencia y de los donados a terceros, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3.571.

Art. 11. — Incorpórase como artículo 3.296 bis del Código Civil, el siguiente:

Artículo 3.296 bis. — Es indigno de suceder al hijo el padre o la madre que no lo hubiere reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna.

Art. 12. — Sustitúyese el artículo 10 de la ley 2.393 por el siguiente:

Artículo 10. — La mujer mayor de catorce años y el hombre mayor de dieciséis años, pero menores de edad, no pueden casarse entre sí, ni con otra persona, sin la autorización de sus padres o de aquel que ejerza la autoridad, o sin la de su tutor, cuando ninguno de ellos la ejerciere, o en su defecto sin la del juez. Los sordomudos en las condiciones referidas, que no sepan darse a entender por escrito, necesitarán la autorización del curador o del juez.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 13 de la ley 10.903 por el siguiente:

Artículo 13. — La privación de la autoridad o la suspensión de su ejercicio, no importan liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del Código Civil si no fueran indigentes.

Art. 14. — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 19 de la ley 14.394 por el siguiente:

Artículo 19, inciso 3º: el padre o la madre.

Art. 15. — Sustitúyese el artículo 2º de la ley 18.248 por el siguiente:

Artículo 2º — El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde a los padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes los progenitores hubiesen todo ello pueden hacerlo los guardadores, el Mi-

nisterio Público de Menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo prescrito en el artículo 3º.

Art. 16. — Sustitúyese el párrafo segundo del artículo 2º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 2º, párrafo segundo: el adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 17. — Sustitúyese el artículo 6º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 6º — El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un año. Esta condición no se requiere cuando adopta al hijo o hijos de su cónyuge.

Art. 18. — Sustitúyese los artículos 11, inciso 1º y 12 del Código de Comercio por los siguientes:

Artículo 11, inciso 1º: conteniendo autorización expresa del padre y de la madre.

Artículo 12. — El hijo mayor de dieciocho años que fuese asociado al comercio del padre o de la madre, o de ambos, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad.

La autorización otorgada no puede ser retirada al menor sino por el juez, a instancia del padre, de la madre, del tutor o ministerio pupilar, según el caso y previo conocimiento de causa. Este retiro, para surtir efecto contra terceros que no lo conocieren, deberá ser inscrito y publicado en el tribunal de comercio respectivo.

Art. 19. — Deróganse las siguientes disposiciones del Código Civil:

Artículos 273, 281, 289, 305, 311 al 344 (título IV y V de la sección II del libro I), 357, 358, 359, 365, 366, 369, 394 al 396, 402 (capítulo V, título VII, sección II, libro I), 3.577 al 3.584 (capítulos IV y V, título IX, sección I, libro IV), 3.596, 3.597, 4.029, 4.042 y 4.043.

Art. 20. — Derógase la ley 14.367.

Art. 21. — Siempre que en el Código Civil, leyes complementarias u otras disposiciones legales se alude a los hijos naturales, extramatrimoniales o ilegítimos en contraposición o para discriminar derechos o deberes respecto a los hijos legítimos, la situación de aquéllos deberá ser equiparada a la de éstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 del Código Civil; y cuando en los mismos textos se alude al padre en ejercicio de la patria potestad, deberá entenderse que tal ejercicio

corresponderá en lo sucesivo a los padres conjuntamente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 264 y siguientes del Código Civil.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JUAN C. PUGLIESE.  
Carlos A. Bravo.

#### ACLARACION

El antecedente de la Cámara de Diputados corresponde a los proyectos que le fueran pasados en revisión con fechas 5 y 26 de setiembre de 1984 y al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 3.959 del 20 de diciembre de 1984, respectivamente.

Sr. Presidente (Gómez Centurión). — En consideración en general.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gómez Centurión). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — En nombre de la Comisión de Familia y Minoridad, voy a expresar determinados conceptos en virtud de los cuales se avalará el dictamen de las comisiones.

Señor presidente: retornan a este recinto para su tratamiento en segunda revisión los proyectos de adaptación jurídica a las nuevas realidades de los tópicos de patria potestad y filiación que fueran sancionados por este honorable cuerpo en las postrimerías del pasado período legislativo.

Vuelven por cuanto la Honorable Cámara de Diputados consideró conveniente introducir algunas modificaciones a lo sancionado por este cuerpo. A su turno, las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad del Senado nacional aconsejan aceptar algunas de las modificaciones y, por otra parte, insistir en numerosas normas en la forma en que fueran sancionadas originariamente.

Este pequeño *racconto* del trámite parlamentario seguido por estos importantísimos proyectos tiene por fin demostrar liminarmente la responsable y profunda tarea legislativa llevada a cabo, lo cual, lejos de sorprender por su aparente lentitud, debería servir para ponderar una vez más la necesaria vigencia del orden constitucional y, en especial, la existencia de un Parlamento pluripartidista que actúe como caja de resonancia de las opiniones de la comunidad. Esto por cuanto a la sanción original siguieron, en la Honorable Cámara de Diputados, nuevos análisis y reflexiones que enriquecieron en gran medida al proyecto y al volver a esta Cámara indujeron un repensar en las instituciones del derecho de familia.

El repensar científico en los temas legislados nos aproxima a lo deseado, pero no garantiza la perfección.

Con ello queremos significar que podrán detectarse ausencias normativas, y aun contradicciones, cuando ante un caso en particular deba aplicarse el plexo jurídico. Pero esto es una constante en el devenir normativo de los pueblos, lo cual permite mantener en permanente evolución y atención el accionar legislativo a fin de ir puliendo las imperfecciones que estas obras de los hombres puedan presentar.

Sin embargo, esta moneda también tiene dos caras, pues es muy posible que nuevos análisis produzcan algunas mejoras. Pero el legislador, en oposición al filósofo y al tratadista, tiene la obligación de actuar en tiempo oportuno para ir solucionando o mejorando las condiciones normativas de la sociedad que le toca vivir, aun a costa de alguna inconsistencia. De aquí es necesario concluir que la prudencia aconseja seguir la máxima aristotélica "*In medio veritas*". Por lo tanto, luego de sopesar el dictamen de comisión que aquí tratamos, interpretamos que el mismo refunde satisfactoriamente las actuales inquietudes sociales, dejando abierta la puerta a una ulterior revisión puntual en la medida en que alguna norma muestre su desajuste con el resto del orden jurídico.

No es ocioso recordar a esta altura que las formas de sanción de las leyes establecidas por nuestra Constitución Nacional, en especial en su artículo 71, nos inhibe de un debate libre en esta segunda revisión, debiéndonos ceñir a aceptar las modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados o a insistir en nuestra sanción original.

Efectuadas estas consideraciones generales, es tiempo oportuno para dedicarnos al articulado en particular, teniendo presente que el análisis será somero y estará referido exclusivamente a las normas de mayor trascendencia.

En tal sentido, el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados modifica el artículo 131 según el texto aprobado por la ley 17.711, artículo que el Senado no creyó oportuno modificar al momento de considerar y aprobar el proyecto de patria potestad. El sancionado en Diputados recepta dos mejoras a la legislación actual, referidas a la necesidad del consentimiento del menor para emanciparse y a la posibilidad de que la habilitación se efectúe en cualquier instrumento público y no necesariamente en escritura pública.

Las modificaciones, como se advertirá, mejoran la redacción actual. En primer término, en el párrafo tercero se introduce la necesidad del

consentimiento del menor a efectos de la habilitación dativa, lo cual aclara el concepto toda vez que no se concibe una emancipación concedida en contra de la voluntad del menor ni se explicaría que los padres plantearan un recurso para liberarse de los deberes que les impone la patria potestad. Esta incorporación tiene sus antecedentes comparados en el derecho español y alemán y dentro de los autores nacionales, en el doctor Borda, el doctor Spota y la doctora Méndez Costa, que critican la solución dada por la reforma introducida por la ley 17.711.

Asimismo, esta solución pone fin a la discusión, pues algunos autores piensan que al menor sólo se lo puede oír, pero nada más.

Segundo, en el precitado tercer párrafo también se modifica el modo en que puede otorgarse la habilitación, la cual a partir de ahora surtirá plenos efectos con la sola condición de efectuarse en instrumento público.

En relación con el artículo 242, sobre el cual se aconseja la insistencia, cabe señalar que los proyectos son conceptualmente similares, agregando el venido de Diputados un párrafo para contemplar la inscripción del recién nacido cuando no exista certificado médico o de obstetra. Esta incorporación recepta lo normal en el artículo 31 del decreto ley 8.204/63, en su segunda parte, que establece que "...a falta de dicho certificado, con la declaración de dos testigos que hubieran visto al nacido..."

Creemos que ambas redacciones pueden ser admitidas, aunque nos inclinamos por la vigente en el artículo 31 del decreto ley 8.204/63, por su amplitud, por cuanto deberá tenerse presente que esta consagración legislativa en una norma de fondo puede llevar a abusos tales como la inscripción de hijos que en realidad resultan nietos extramatrimoniales, situación que cobra importancia en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos.

El artículo 245 es una insistencia en la posición sostenida por este cuerpo en su sanción originaria, toda vez que la redacción de Diputados resulta comprensiva de las situaciones planteadas en el artículo 243 y de la contenida en el artículo 244, mientras lo aprobado por el Senado se refiere a lo normado en el artículo 243. Ello se fundamenta en el hecho de que el consentimiento del artículo 245 se refiere a los casos en que se presume la paternidad. Pero no puede hacerse extensivo a las presunciones del artículo 244, que parten del supuesto de que los padres posibles pueden ser dos, inclinándose la ley por uno o por otro y admitiendo la ley prueba en contrario.

Con referencia al artículo 253 también creemos conveniente insistir en lo aprobado por este cuerpo, toda vez que a la sanción del Honorable Senado la Cámara de Diputados agrega un párrafo estableciendo una presunción de paternidad a la negativa a someterse a pruebas biológicas. Esta incorporación obedece a la secuela del pasado proceso militar, pero consideramos que ella viola el derecho de defensa en juicio y, por lo tanto, puede ser censurada por inconstitucional. Por esta razón creemos que es conveniente mantener la redacción del Senado dejando a la prudencia del juez, a la luz de la sana crítica, la resolución de cada caso en particular.

En relación con el artículo 254, la Honorable Cámara de Diputados consideró escaso el plazo de caducidad establecido por este cuerpo y propuso elevarlo de uno a dos años. Entendemos que es útil receptar dicha modificación.

Referente al artículo 258 del Código Civil, dos son las modificaciones que la Cámara de Diputados establece en el proyecto aprobado por el Senado. En la primera parte del artículo incorpora, además de la disolución y anulación del matrimonio, el divorcio y la separación de hecho. Por otra parte, elimina la última oración del proyecto aprobado en el Senado, que exige que antes de admitirse la demanda se acredite la verosimilitud de los hechos en que se funda. Pensamos que debe mantenerse la redacción dada en el Senado, atenta la importancia de evitar demandas insostenibles que puedan afectar o poner en tela de juicio el honor de la mujer casada, lo cual quedó claramente analizado cuando la Comisión estudió el artículo 248 del proyecto de los señores senadores Menem y Sánchez, cuyo desarrollo surge en la página 2.688 del Diario de Sesiones, del 26 de septiembre de 1984.

La verosimilitud implica que por sí misma la demanda deba aparecer verdadera y pueda creerse, es decir que el resultado allí impetrado tiene amplias posibilidades de producirse. Ello no implica un prejuizgamiento del magistrado, pero si un amplio estudio de los hechos y las circunstancias invocadas y probadas —si esto último pudiera efectuarse antes de trabar la litis— para admitir la acción con anterioridad al traslado.

Procede seguidamente considerar en conjunto los artículos 264, 264 bis, 264 ter y 264 quater. Las comisiones y los tratadistas consultados han coincidido en considerar que resulta más ajustado a una buena técnica legislativa lo que aprobó este cuerpo y que por tal razón es conve-

niente insistir en su sanción. No se nos escapa que al pretender aprobar nuevamente el texto originariamente propuesto también involucramos al inciso 6 del artículo 264, que mereció en el anterior debate una clara interpretación de un senador del bloque de la primera minoría, en el sentido de que la decisión de los jueces que otorguen la patria potestad a los padres a quienes se condene en juicio de filiación merece que en todos los casos se recabe la opinión previa del cónyuge que voluntariamente reconoció al hijo para establecer las circunstancias y los modos de la tenencia o del ejercicio de la patria potestad. Con estas salvedades creemos conveniente y necesaria la insistencia propuesta.

La modificación al artículo 274 del Código Civil no fue propuesta por este honorable cuerpo al sancionar el régimen de patria potestad, pero sí fue motivo de sanción por parte de la Honorable Cámara de Diputados. El texto modificado impone la obligación para el juez de oír a los menores si tuvieran más de dieciocho años. Luego de un pormenorizado análisis se ha creído conveniente no receptar la modificación propuesta, toda vez que fija una obligación y una edad arbitrarias y, consecuentemente, cercena las facultades de la magistratura para disponer las medidas de prueba que en cada caso en particular resulten aconsejables.

La insistencia en el artículo 294 de la sanción del Senado tiende a hacer compatible dicha norma con la propuesta efectuada en el artículo 264 quater, inciso 7.

A su turno y en relación con el artículo 297 consideramos que debe insistirse en el texto sancionado en el Senado, toda vez que su redacción es más clara. Además, en lo que se refiere a los bienes, resulta de una caracterización amplia y no sólo restringida a los registrables, lo cual podría dar lugar a la dilapidación del patrimonio del menor cuando no estuviera integrado por bienes registrables.

Vinculado con el artículo 307, el sentido de ambas sanciones es similar, pero creemos que la sanción del Senado resulta más ajustada. El concepto de abandono "malicioso" contenido en el inciso 2º de este artículo correspondiente a la sanción de Diputados traería mayores dudas que las que pretende evitar y, por esa razón, es preferible la redacción del Senado.

Acerea de la insistencia en relación con los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil es opinión unánime de los catedráticos del derecho de familia, pues se entiende que la redacción originaria comprende a todos los bienes donados, cualquiera fuese el destinatario. Esta es la misma razón que impone suprimir la aclaración



ción de Diputados referente a los bienes que deben colacionarse a la masa hereditaria, por cuanto la redacción propuesta por este honorable cuerpo también resulta abarcadora de aquellos bienes donados a los herederos que ingresan a la masa por acción de reducción.

Queda por último analizar la modificación al artículo 10 de la ley 2.393, que replantea la vieja discrepancia doctrinaria sobre si el emancipado por habilitación de edad requiere autorización de quienes ejercían la patria potestad a fin de contraer matrimonio. La sanción de Diputados se inclina por la negativa, atento lo dispuesto en el artículo 306, inciso 5, según su sanción, no aceptada por este cuerpo, y en la resolución O. A. 17/5 del año 1970 del Registro Civil de la Capital Federal, en cuya virtud los menores habilitados pueden contraer matrimonio sin venia de los padres ni la supletoria del juez. A su turno, la sanción del Senado se inclina por exigir el consentimiento de los padres aunque el menor estuviere habilitado. Nos inclinamos por esta última solución. En su apoyo cabe citar la doctrina de Bustamante Alsina, Méndez Costa, Spota y Orelle.

Con estas escuetas consideraciones que pretenden fundar lo aconsejado por vuestras comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad, pido a mis pares su voto favorable para el proyecto en debate, en la seguridad de que con su sanción se llevará calma y tranquilidad a innumerables hogares argentinos.

En su oportunidad el doctor Menem hará una pequeña corrección formal al dictamen de las comisiones, la que es compartida por ellas en su totalidad, pues se ajusta a las pautas del artículo 71 y concordantes de la Constitución Nacional.

Con estas palabras dejo fundada en esta Cámara la opinión que expresa el dictamen de las comisiones de Familia y Minoridad y de Legislación General.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: vuelven a tratamiento de este Honorable Senado los proyectos que oportunamente fueron sancionados por unanimidad en este cuerpo y en los que se introducen modificaciones al Código Civil en materia de patria potestad y filiación. El 5 de septiembre del año pasado se aprobó el proyecto sobre patria potestad, y el 24 de septiembre del mismo año, el de filiación. Al ser tratados en la Cámara de Diputados, ambos proyectos fueron fundidos en uno solo, que es el que hoy tenemos a consideración, con algunas modificaciones.

En primer término, debo manifestar, para cumplir con un deber de conciencia, que yo pretendía que este tratamiento hubiera tenido mejor suerte en la Cámara revisora. Digo esto por cuanto el trámite que se le impuso no fue del todo regular, lo cual dio origen a una situación que felizmente fue salvada, pero que pudo haber dado lugar a un conflicto entre ambas Cámaras. Debemos recordar, en efecto, que tras ser remitidos a la Cámara de Diputados ambos proyectos hacia fines de las sesiones del año pasado, fueron enviados a las comisiones respectivas. Pero en el período extraordinario de sesiones el Poder Ejecutivo remitió un proyecto que contemplaba ambas situaciones: patria potestad y filiación.

Contrariamente a lo que era de suponer, es decir, la consideración de los proyectos remitidos por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados tomó como base de su tratamiento el proyecto del Poder Ejecutivo, y sólo tuvo a la vista —como se dice en los dictámenes pertinentes— las sanciones que le había enviado el Senado, juntamente con otros proyectos de señores diputados.

Es decir, que prácticamente no se le dio carácter de proyecto de ley a nuestra sanción sino que se la equiparó con los proyectos presentados por varios señores diputados. Esto originó una confusión, ya que al no ser tratados los proyectos sancionados por el Senado, la Cámara de Diputados se consideró Cámara de origen, a punto tal que al ser remitidas las sanciones de la Cámara de Diputados a este Senado, la nota del señor presidente de aquella decía "en revisión".

El problema así originado obligó a derivar el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se expidiera acerca de cuál era la Cámara de origen. Esta comisión produjo dos dictámenes. Fue aprobado uno en virtud del cual está sanción de la Cámara de Diputados se devolvió, por cuanto ya la Cámara de Senadores había tratado estos temas y todavía no habían sido devueltos los proyectos que fueron remitidos, reivindicando así para este cuerpo su condición de Cámara de origen.

La Cámara de Diputados consideró nuevamente esta cuestión y remitió el mismo proyecto que había sido enviado con anterioridad, pero aclarando que reconocía al Senado su carácter de Cámara de origen. Por cierto, esto hizo dilatar la cuestión más allá de lo habitual. El trámite correspondiente se retrasó y esto generó algunas críticas. Inclusive, un señor candidato a diputado dijo hace pocos días que lamentablemente estos proyectos en materia de familia estaban demorados, citando específicamente el

de patria potestad. Al respecto, este candidato expresó que el proyecto se encontraba demorado *sine die* en el Senado.

Estimo pertinente decir que, oportunamente formulé una aclaración sobre este tema, pero los medios de difusión nunca la publicaron. De esta manera vemos cómo, lamentablemente, ese derecho a réplica que algunos entienden que existe de hecho, no funcionó en esta oportunidad. Por eso me veo obligado a hacerla en este momento, para dejar perfectamente establecido que si existe alguna culpa en la demora para el tratamiento de estos proyectos no es precisamente de la Cámara de Senadores.

Pero deseo hacer otra reflexión sobre esta cuestión. Desde un punto de vista pragmático hubiera sido mucho más efectivo que la Cámara de Diputados tratara nuestros proyectos, habida cuenta de que si hacemos un análisis de las normas sancionadas podremos advertir que la mayoría de ellas tuvieron origen en el Senado de la Nación.

El doctor Abel Fleitas, en un artículo publicado hace pocos días en la revista "La Ley", hace un minucioso análisis de estas normas y llega a la conclusión de que de las 80 reformas que se introducen en el Código Civil y leyes complementarias en materia de patria potestad y filiación, 42 son las sancionadas por la Cámara de Senadores. Hay otras 28 que, también sancionadas por este cuerpo, fueron objeto de algunas modificaciones en Diputados y sólo 10 normas tuvieron como origen el proyecto del Poder Ejecutivo o la Cámara de Diputados. Es decir que prácticamente el 90 por ciento de las normas sancionadas por la Cámara de Diputados tuvieron origen en esta Cámara de Senadores. Entonces, hubiera sido mucho más práctico tomar como base de trabajo nuestro proyecto y no el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Dejo de lado todas las especulaciones que se hicieron sobre la paternidad de estos proyectos porque no se trata de ver quién o quiénes fueron los autores. Pero sí pretendo dejar sentado que la profunda y amplia publicidad que se dio a este tratamiento en la Cámara de Diputados confundió a la opinión pública porque muchos creyeron que la iniciativa había tenido origen en esa Cámara. A tal punto ocurrió así que una publicación llegó a sostener que desde el año 1913 no se sancionaba en el país una ley de esta importancia, olvidando que no ya en aquel año sino en septiembre del año pasado este Senado había sancionado las dos leyes a que venimos haciendo referencia, es decir sobre patria potestad y filiación.

De todos modos debo manifestar que las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados a nuestros proyectos no son fundamentales, por cuanto se mantiene la filosofía de los mismos. Así en materia de patria potestad se respeta el principio consistente en colocar a la mujer en igualdad de condiciones jurídicas respecto del padre en lo que se refiere al manejo de las relaciones con los hijos. Y en materia de filiación se respeta el principio de unidad de filiaciones priorizando el nexo biológico o vínculo de sangre y siguiendo además todos los principios que inspiraron la sanción de esta norma por parte del Senado.

En lo que se refiere al dictamen de las comisiones, debo anticipar mi apoyo con algunas ligeras modificaciones que necesariamente tendremos que hacer para perfeccionar las normas que la Cámara de Diputados ha remitido en segunda revisión.

El dictamen de las comisiones toma tres tipos de actitudes respecto del proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados. En primer término rechaza una modificación introducida al artículo 274 del Código Civil, norma ésta que no había sido motivo de reforma por parte de este cuerpo; es decir que, directamente, se modifica una norma que no estaba incluida en la sanción del Senado.

Por otra parte, como Cámara de origen se insiste en la sanción de algunas normas que fueron modificadas por la Cámara de Diputados, a las cuales me voy a referir con posterioridad.

En tercer término, se aceptan ciertas modificaciones a un grupo de artículos a los cuales también voy a hacer referencia luego, en virtud de que las comisiones estiman que son correctas y aceptables.

Comparto en general el criterio sustentado por las comisiones, pero durante la discusión en particular voy a formular algunas observaciones. Ahora sólo quiero manifestar que entre las normas acerca de las cuales se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, se mencionan los artículos 77 y 251 del Código Civil, ya que se había estimado erróneamente que la Cámara de Diputados los había modificado. En realidad no fue así, ya que la Cámara joven sancionó estas normas tal como fueron remitidas por el Senado. Por esa razón hay que considerar que no están incluidas en ese grupo.

Con respecto a las modificaciones introducidas a la sanción de esta Cámara, voy a referirme a ellas durante la discusión en particular, para que el intérprete sepa en el día de mañana

en qué consisten esas reformas, la mayoría de las cuales son de redacción. Pero si quiero hacer algunas referencias, reforzando el informe del señor senador Brasesco, respecto de aquellas normas acerca de las cuales se rechaza su modificación y acerca de aquellas en las que insistimos en la anterior sanción.

Una de ellas es la del artículo 274 del Código Civil, que se refiere a la representación que tienen los padres con respecto a los hijos para estar en juicio como actores o como demandados o para celebrar contratos en nombre de ellos. A esta norma del Código Civil la Cámara de Diputados le introdujo una modificación consistente en que, en esos casos, el juez deberá oír al menor. Así, la sanción de la Cámara de Diputados dice al respecto: "Los menores serán oídos si tuvieren más de 18 años".

Comparto el criterio de las comisiones de no aceptar esta innovación, por cuanto es una norma que crearía confusiones, ya que no se explica en qué carácter intervendría el menor. Sabemos que en un proceso los participantes tienen papeles determinados: hay un actor, un demandado y un tercero, pudiendo haber un tercero excluyente y un tercero coadyuvante. Aquí no se explica en qué carácter intervendría el menor, no se dice si va a intervenir como litisconsorte, es decir, actuando juntamente con el padre, si lo va a oír el padre o si lo va a oír el juez. O sea, las comisiones han considerado con razón que esta modificación sólo traería problemas al entendimiento de esta norma. De todos modos, no cabe ninguna duda que el juez tiene facultades, en su caso, para oír al menor; en consecuencia, no se justifica que lo incluyamos, porque puede dar lugar a pensar que podría tener una participación en esos roles anteriormente mencionados. Por todo esto entendemos que está bien fundado el rechazo de esta modificación.

Otro de los artículos en los que se insiste en la sanción del Senado es el 242, que se refiere a la determinación de la maternidad. Aquí, la modificación introducida por la Cámara de Diputados consiste en que, en caso de pobreza o marginalidad, la inscripción del nacimiento podrá hacerse por medio del testimonio de dos vecinos. Además de las razones que dio el señor senador Brasesco —que son muy atendibles, por cierto—, se presenta un problema mucho más grave, porque estamos hablando de la determinación de la maternidad y resulta peligroso incluir en esa norma que por medio de la declaración de dos vecinos puede atribuirse la maternidad a una persona.

En este tema tenemos que distinguir muy claramente entre lo que constituye el hecho del nacimiento y la atribución de la maternidad. El hecho del nacimiento puede ser constatado por dos vecinos, según el artículo 31 del decreto 8.204, pero una cosa muy distinta es que por esa vía pueda llegar a atribuirse la maternidad.

Por los motivos expuestos, considero que está bien excluida por la comisión la posibilidad de esta reforma, porque es una norma peligrosa que sentaría un precedente nada recomendable y podría dar lugar a grandes confusiones. De todos modos, existe la posibilidad de acreditar el nacimiento por medio de dos testigos, pues ello está contemplado en el artículo 31 de la disposición ya citada.

Otra de las normas en las que se insiste en la sanción anterior es la relativa al artículo 245. La Cámara de Diputados introdujo una modificación según la cual en cualquier caso el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurriera el consentimiento de ambos. Realmente, la sanción de la Cámara de Senadores hacía únicamente referencia a los casos de separación de hecho o de divorcio, pero nunca a los casos de matrimonios sucesivos que contempla el artículo 244. Tal como ha quedado redactada la norma podría entenderse que cuando hace referencia a cualquier caso se está refiriendo no sólo a los supuestos previstos en el artículo 243, sino también a los contemplados en el artículo 244, y esto sería tergiversar el sentido de la norma.

Por estos motivos se insiste nuevamente en la redacción del artículo 245 según la sanción dada por la Cámara de Senadores.

Con referencia al artículo 253, en esta norma la Cámara de Diputados introdujo una modificación que con razón fue rechazada por las comisiones que han intervenido en el estudio de este tema. Se refiere a las pruebas de las que puede valerse en las acciones de filiación. En este caso, cuando se hace mención a las pruebas biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte, se hizo un agregado según el cual la negativa a someterse a esas pruebas constituirá una presunción, salvo prueba en contrario. Como hace referencia a una presunción, lo primero que cabe preguntarse es a qué tipo de presunción se refiere y, en este sentido, debe notarse que la modificación no realiza ninguna indicación. Además, no cabe duda de que en la mente de quien propicia esta reforma, está implicado el demandado en el caso de negarse a someterse a esas pruebas biológicas, pero también puede ocurrir que el

actor se niegue a someterse a esas pruebas, y en ese caso se plantearía el problema de saber cómo jugaría la presunción en contra del actor.

Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta que el juez tiene amplitud de medios y de elementos de juicios como para determinar este mismo efecto, consideramos que no es prudente incluir esta presunción, por cuanto importaría en alguna medida coartar las posibilidades del juez de realizar un juicio mucho más justo.

También insisto en la sanción del artículo 258, tal como está en el dictamen. La Cámara de Diputados suprimió una disposición que nosotros habíamos sancionado referida a los casos de impugnación de la paternidad, comprendidos en las acciones de impugnación de estado.

En el último párrafo de este artículo nosotros exigimos para la admisión de la demanda, en todos los casos en que exista una impugnación de estado, la acreditación previa de la verosimilitud de los hechos en que se funde.

Esta prevención tiene por objeto, precisamente, actuar como una especie de freno de todas las aventuras judiciales que, aun cuando en el futuro no prosperen, pueden ocasionar dificultades o escándalos en la familia, por cuanto se está impugnando la paternidad de un hijo. Este es el motivo por el cual exigimos el requisito de la verosimilitud de los hechos en que se funde la demanda; es decir, que debe tratarse de algo creíble o que tenga principio de confiabilidad. De esta manera actuará como freno, reitero, de todas las aventuras que puedan llegar a ocasionar el desquicio o graves problemas en la familia debido a la promoción de una acción de tal naturaleza.

Estas son las razones por las que se incluye este principio y por las cuales la comisión, con buen criterio, ha votado por mantenerlo tal como fue sancionado por esta Cámara de Senadores.

Con respecto a los artículos 264, 264 bis, 264 ter y 264 quater, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones. Comparto también la posición adoptada por la comisión en el sentido de que resulta mucho más preciso, ajustado y correcto el régimen establecido en la sanción del Honorable Senado.

Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados no sólo no son muy claras —luego formularé algunas observaciones— sino que además pueden dar motivo a algunos reparos u objeciones. Un ejemplo de ello es que no distingue entre los casos en que se trata de hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera de él.

En este tema debemos aclarar un aspecto. Nosotros hemos establecido la equiparación de

las filiaciones —está prevista más adelante en este proyecto que estamos considerando—, lo que no significa negar una realidad de hecho: existen hijos matrimoniales y extramatrimoniales. No negamos esta realidad —y así lo manifesté en ocasión de fundamentar en general la ley de patria potestad el 5 de septiembre de 1984— y por ello no podemos aceptar que no se mencionen los distintos casos que ha considerado la Cámara de Senadores en su sanción. En la sanción de la Cámara de Diputados sólo se distingue entre los padres que conviven y los que no lo hacen, sin mencionar si se trata de hijos matrimoniales o extramatrimoniales.

Estimo que es mucho más precisa la forma como el Honorable Senado ha regulado este tema, razón por la cual considero correcto que se haya insistido en su sanción.

El artículo 264 bis, inciso 4º de la sanción de diputados, referido al caso de autorizaciones, hace alusión a que será necesario el acuerdo expreso de ambos progenitores, si se tratare de menores de dieciocho años de edad, no siendo así luego de cumplida ésta.

Con esto se crea una confusión. Hasta los dieciocho años funcionaría el régimen de la patria potestad conjunta y pasada esa edad el del ejercicio de la patria potestad indistinta, es decir que la autorización podría ser conferida por cualquiera de los dos progenitores.

Esto desvirtúa el principio del artículo 264 quater por cuanto establece que en todos los casos que allí se mencionan se requiere la autorización de ambos padres, a diferencia de todos aquellos otros actos que no están expresamente mencionados y donde sí menciona el régimen de la patria potestad indistinta, es decir, cualquiera de los padres puede efectuar la autorización. Pero no podemos introducir ese régimen en uno de los casos específicos que está contemplado en el artículo 264 quater del Código Civil. Por eso estimo que es correcto lo que han dictaminado las comisiones de Familia y Minoridad y de Legislación General.

En cuanto al artículo 297 del Código Civil, también se insiste en la sanción dada por el Senado. Esta norma se refiere a la autorización que necesitan los padres para disponer de bienes de los hijos. Nosotros dijimos que en todos los casos es necesaria la autorización judicial para que los padres puedan efectuar esos actos de disposición.

La Cámara de Diputados limitó la autorización judicial al caso de que los padres enajenen bienes no registrables de sus hijos; es decir, circunscribe la autorización a los bienes registrables. Nosotros sabemos que hay algunos tipos de

bienes que no son registrables y que tienen tanto o mayor valor que los que sí lo son; por esa razón no cabe establecer una suerte de franquicia para que el padre no necesite autorización judicial cuando quiera disponer de bienes de sus hijos que no sean registrables.

En cuanto al inciso 6º del artículo 306 del Código Civil, la Cámara de Diputados le dio otra redacción, referida al cese de la patria potestad y, según nuestro criterio, incurre en una imprecisión. Nuestras comisiones decidieron volver a la redacción propuesta originariamente por el Senado, por cuanto los hijos no se dan en adopción en forma directa, sino que siempre lo hace el juez mediante la sentencia. Nuestra redacción es mucho más precisa porque decimos: "...por la adopción de los hijos..." y no "...por dar en adopción...".

Por otra parte, diputados incluye como cese de la patria potestad a la emancipación dativa. Las comisiones no han compartido ese criterio por cuanto, en el caso de la emancipación dativa, la patria potestad subsiste. Este tipo de emancipación se refiere principalmente a actos de tipo patrimonial y no a todo tipo de actos. Por esa razón no corresponde dar por concluida la patria potestad en esos casos. En consecuencia, tampoco aquí se acepta la reforma de la Cámara de Diputados.

En cuanto al artículo 307 del Código Civil, la modificación introducida por la Cámara de Diputados se refiere también a la pérdida de la patria potestad, en el caso del abandono que hagan los padres de los hijos. La sanción dada por Diputados califica el acto y habla de "abandono malicioso". Esto daría lugar a efectuar una interpretación para determinar cómo está configurado el abandono, el que requeriría algún tipo de intencionalidad o dolo para que fuera malicioso; es evidente que esto dificultaría la interpretación. Nosotros creemos que hay que referirse al abandono que es voluntario; es decir, producido el abandono, se pierde la patria potestad. Porque normalmente el abandono no se hace para causar un daño al menor, sino que suele deberse a otras causas. De modo que está bien que no se incluya el calificativo de "malicioso".

En cuanto a los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil, a los que hizo mención el señor senador Brasesco, entendemos que la sanción del Senado es más correcta por cuanto al hablar de bienes donados se está refiriendo también a los bienes colacionables. De acuerdo con la redacción dada en Diputados podría ocurrir que fueran bienes donados pero con dispensa de co-

lación, lo que introduciría un factor perturbador en la interpretación de esta ley. Nosotros creemos que cuando se habla de bienes donados se cubre todo el espectro de posibilidades, razón por la cual consideramos correcto el temperamento de rechazar la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

Señor presidente, señores senadores: éstos son los motivos por los que adhiero al dictamen de comisión en general, pero durante la discusión en particular haré algunas consideraciones con respecto a los artículos modificados por la Cámara de Diputados y aceptados por la Comisión.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Señor presidente: voy a apoyar decididamente los proyectos de ley en consideración pues consagran dos trascendentes conquistas de la cultura y de la democracia argentina: la igualdad de todos los hijos por razón de nacimiento y la igualdad del padre y la madre en el ejercicio de la patria potestad.

Este es el camino hacia adelante que la sociedad de nuestro tiempo busca permanentemente. Las sanciones que pretendemos obtener están orientadas a romper las escolleras de muchas injusticias que ha sufrido hasta ahora nuestra sociedad.

Implica una amplia y profunda reforma del Código Civil, tanto en lo que se refiere a las relaciones de familia como a la tramitación de los derechos sucesorios y responde a actitudes opinables. Es posible coincidir o disentir en los aspectos tan brillantemente expuestos por los señores senadores Brasesco y Menem, pero creo que en los principios generales el Senado está mostrando una unanimidad que persigue una mayor igualdad.

Consideraré brevemente —porque no deseo restar mucho tiempo a esta Honorable Cámara— el primer instituto legal de la igualdad de los hijos por razón de nacimiento.

Vengo a defender aquí el proyecto que, elaborado por la Comisión Parlamentaria del MAY que preside el doctor Cardozo Cúneo, presenté en mayo del año pasado, registrado en la sección 5 bajo el número 387, que establecía la igualdad de todos los hijos por razón de nacimiento, tanto en sus relaciones de familia como en sus derechos hereditarios, y pretendía derogar todas las calificaciones todavía vigentes en el Código Civil y demás leyes con respecto a los hijos, de modo que a partir de la sanción de ese proyecto ningún documento público de identidad pudiera con-

Establecía también la derogación del artículo 311 del Código Civil, que aún conserva la última reminiscencia de aquella bárbara calificación de "hijos adulterinos" que, en su tiempo, condenaba a una persona, por el solo hecho de ser descendiente de alguien que al momento de su concepción no pudiera casarse legalmente, a carecer de paternidad, de maternidad, de derechos sucesorios de sus progenitores, e incluso hasta del de recibir alimentos ni siquiera en los momentos más indefensos de su propia vida.

Fundamentábase el proyecto que presenté a este honorable cuerpo nada menos ni nada más que en la Constitución Argentina. Y me extrañaba que nunca antes se hubiera planteado la inconstitucionalidad de estas leyes que ahora estamos derogando, porque la Constitución Nacional dice que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento y porque todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley. Agregaba en mi proyecto que sólo por el peso de esa tradicional injusticia y las situaciones creadas se explica que no haya sido declarada la inconstitucionalidad que denunciaba.

Fundamentaba también esta pretensión que ahora va a ser aprobada en la declaración de los derechos humanos, sancionada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 1º proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, y dotados como están en razón de conciencia deben comportarse fraternalmente con sus semejantes. Esta declaración es ley de la Nación, porque ha sido ratificada por el Congreso Argentino, de acuerdo con el artículo 31 de nuestra Constitución.

Creo, señor presidente, humildemente que en la síntesis clara de su objetivo este proyecto que se trata —en el que se han mezclado varios, algunos muy exhaustivos y muy inteligentes, como el del señor senador Menem, con la sencillez del mío, que quería limpiamente crear la igualdad en todos los rumbos— sirve a una humanidad y un futuro distinto para nuestro país.

Por aplicación de su artículo 2º derogamos el carácter de ilegítimo de los hijos extramatrimoniales. En cambio, el artículo 21 del proyecto que consideramos no anula todavía esta calificación sino que los equipara a la situación de aquellos contemplados en el artículo 240 del Código Civil. Para mí, todas las personas, en virtud de sus nacimientos, reciben una dignidad, la dignidad de la propia vida, que es siempre superior a la del derecho positivo.

De cualquier modo el proyecto que tratamos es superior al establecido en el año 1954 por la ley 14.367, aunque cabe reconocer que aquello

implicó un real avance en la legislación imperante entonces. Pero pienso que se quedó a mitad del camino. En efecto, aunque en su primera disposición puso énfasis en afirmar que proscribía las discriminaciones de los hijos por razón de matrimonio, en realidad sólo vino a anular las discriminaciones existentes en la categoría de hijos ilegítimos, pero dejando subsistentes sus depri-mientes calificaciones de hijos legítimos. También se quedó a mitad del camino en materia de derecho sucesorio, porque se llevó de un cuarto a la mitad la vocación hereditaria de los llamados ilegítimos en relación con los legítimos.

Por eso he querido volcar humildemente algunas ideas en este debate: la igualdad por razón del nacimiento es un auténtico y definitivamente intransigente derecho humano que tenemos que defender, que debe imponerse cuanto antes, no sólo para los nacidos en el territorio patrio sino para los que vengan de otros lares a vivir en nuestra tierra.

Yo sé que hay detractores. Lo vemos en los diarios y en las revistas y nos cruzamos con sus carteles. Hay detractores de esta reforma que sostienen que la igualdad tiende a la destrucción de la institución familiar. Pienso que hay que responderles que la perduración de la injusticia es lo que más debilita a las instituciones. Hoy escuchábamos a un orador que decía que la forma de custodiar la democracia era obtener que ella hiciera justicia y, como todos sabemos que la democracia tiene que dejar de ser abstracta, no se podrá hablar de igualdad si no creamos las condiciones necesarias en el escenario de nuestra proyección histórica.

Esto fue agitado apasionadamente por sectores ultras a los que nosotros debemos respetar como a cualquier otra idea. Pero quiero advertir que se trata de ubicarnos como si fuéramos una especie de demonio de la sociedad argentina sólo porque buscamos una mayor igualdad.

Para demostrar que no es así voy a citar nada menos que a la Conferencia Episcopal Argentina, que, en su declaración titulada "Dios, el hombre y la conciencia", después de destacar los valores fundamentales del hombre y la familia afirma en el apartado 34: "La vigencia de la ley justa y humana hará posible que los ciudadanos, particularmente los más débiles, no se sientan amenazados por ella sino, por el contrario, ayudados y protegidos en el ejercicio de su libertad", y agrega: "Sobre esta base será posible combatir su menosprecio y transgresión sistemática".

Algunos han dicho que esto es terriblemente anticatólico, y sin embargo el nuevo Derecho



Canónico también sustenta la igualdad de todos los hijos en el campo sucesorio. Estamos muy atrasados en ese aspecto. Yo presenté en esta Cámara una iniciativa para que en la Argentina se modificara la legislación sobre nulidad del matrimonio, que por supuesto no es el divorcio. En punto a nulidad nosotros estamos más atrasados que la reforma canónica del actual Pontífice de enero de 1983, tal vez porque anduvimos mucho tiempo en las tinieblas y ellas triunfaron en los aspectos vinculados con una vida más limpia, honrada y saludable, como, por ejemplo, que en una familia todos los miembros puedan vivir en el marco de su propia dignidad personal.

La otra sustancial reforma que hoy estamos introduciendo se ocupa del problema de la patria potestad para ambos padres. Esto no ha sido considerado todavía con la amplitud necesaria, pero significa por lo menos un avance, y creo que responde a una nueva realidad de lo que debe ser la familia de los argentinos en esta dinámica transformadora que está haciendo vivir en segundos lo que la historia vivió ayer en siglos.

La nueva patria potestad es otra reforma trascendente, porque en el momento de su sanción la mujer argentina y la extranjera que habitan nuestro suelo habrán alcanzado la mayor igualdad con el hombre en plena capacidad. Sólo en 1926, hace menos de sesenta años, pero ya son muchos, se dictó la ley 11.357, llamada de los "derechos civiles de la mujer" que igualó a la mujer mayor de edad soltera, viuda o divorciada, con el hombre mayor de edad, pero con algunas atenuaciones legales dejó subsistente la incapacidad de hecho relativa de la mujer casada establecida en el inciso 2) del artículo 55 del Código Civil.

Si bien la ley 17.711 de 1968 declaró la plena capacidad de la mujer mayor de edad, dejó subsistente el artículo 264 del Código Civil, en el sentido de que el ejercicio de la patria potestad de los hijos legítimos corresponde al padre. La ley que —según espero— sancionaremos al concluir este debate, consagrará la plena igualdad de ambos sexos al aniquilar tan viejo privilegio del padre sobre la madre.

Tengo confianza en que esta ley va a ser promulgada. El Congreso argentino votó ya una ley de patria potestad bastante semejante a la que estamos por sancionar, pero fue vetada por la presidenta constitucional de la Nación, señora Isabel Perón. Esto marca cómo los tiempos están estableciendo parámetros distintos para nuestras propias respuestas como políticos.

Por lo expuesto, señor presidente, que se relaciona con principios muy consubstanciados con mi propia conciencia y, no dudo, con la de nuestro partido, y en virtud del valor histórico que tendrá esta sanción, pospongo debatir algunas diferencias existentes con los proyectos que yo presenté. Hago esto en homenaje al consenso, que prestigia aún más esta sanción de nuestro cuerpo.

Saludo, entonces, a las dos grandes conquistas que estamos por poner en marcha en el campo de la igualdad civil, y que ojalá sean irreversibles: la de los hijos extramatrimoniales, no culpables de las actitudes o de los amores de sus padres, y la de todas las madres en el ejercicio compartido de la patria potestad sobre sus hijos menores de edad.

Señor presidente: estas sanciones van en busca de una sociedad más justa, con hombres, mujeres, hijos y niños más dignos. ¿Qué mejor servicio podemos brindarle a la Nación como legisladores? La historia es la lucha por la dignidad y la libertad, y creo que esta votación integra nuestra pretensión de mayor dignidad.

Afirmo que me hace muy feliz que nuestra conciencia democrática abra estos rumbos y perfeccione la libertad de todos los argentinos.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Se va a llamar a los señores senadores para proceder a la votación.

—Así se hace.

—Después de unos instantes.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — En consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 1º y 2º.

—Se lee el artículo 3º.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: solicitaré que se deje sin efecto este artículo, que sustituye la denominación del Título III, de la Sección Segunda, del Libro Primero del Código Civil, que expresa "De la Patria Potestad". La Cámara de Diputados lo ha cambiado por "De la Autoridad de los Padres". Del debate que sobre esta cuestión se mantuvo en la Cámara de Diputa-



dos, surge que esta actitud fue adoptada porque numerosas legislaciones han tomado esta terminología, es decir, "De la Autoridad de los Padres". Y el miembro informante hizo una prolija fundamentación de las razones que avalaban tal pedido.

Personalmente no comparto su temperamento porque la denominación "De la Patria Potestad" tiene una tradición, un significado y un sentido que, de ningún modo se ve desvirtuado por las modificaciones que se hagan a la institución. Al respecto, creo que el nombre de las instituciones tiene importancia en cuanto al contenido que se les dé a las mismas.

En realidad, no hay inconvenientes en mantener la expresión vigente porque el término patria no significa que se haga referencia únicamente al padre, como tampoco el de potestad implica que se haga alusión sólo a los derechos que tenga el padre, y no a los deberes. En este sentido Busso, en su *Código Comentado*, al referirse al artículo 264, también tiene una postura negativa respecto del cambio de denominación. El se inclina por la expresión "De la Patria Potestad". Pero, además de todo esto, hay una razón práctica.

Este cambio de denominación se hubiera justificado de haberse aceptado las sanciones de Diputados respecto de los artículos 264, 264 bis, 264 ter y 264 quater del Código Civil. Pero al no aceptarlas, al rechazarlas e insistir en nuestra sanción, en todos los casos hablamos de patria potestad, razón por la cual no podríamos ahora cambiar el título, porque podría dar lugar a alguna confusión.

Es cierto que en otras normas posteriores en las que aceptamos las modificaciones de la Cámara de Diputados se habla en algunos casos de la "autoridad de los padres"; pero considero que lo debemos tomar como sinónimo, porque si vamos al *Diccionario de la Real Academia Española* veremos que patria potestad es la autoridad de los padres. De modo que no habría ningún inconveniente en que en algunas disposiciones se hablara de autoridad de los padres como sinónimo de patria potestad. Creo que por nuestra tradición jurídica, por el concepto que tiene tal institución, es mucho más conveniente mantener el título "De la Patria Potestad".

Por las razones indicadas voy a proponer que se rechace el artículo 3º y se mantenga la denominación del título que tenía en el Código Civil.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: la comisión que presido acepta la propuesta del senador Menem y la apoya por cuanto, como ha expresado correctamente, resguarda una tradición jurídica.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Señor presidente: luego de un cambio de ideas sobre lo que significaba el título acerca de la autoridad de los padres en la patria potestad, y para darle una salida constitucional al trámite de este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados, a fin de que antes del 30 de septiembre tenga sanción definitiva y pueda ser promulgado por el Poder Ejecutivo, hemos acordado suprimir el artículo 3º. Dicha supresión determina la insistencia en la anterior sanción del Senado ratificando el título "De la Patria Potestad".

En ese sentido, señor presidente, se ha aceptado unánimemente la propuesta del señor senador Menem.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Se va a votar la supresión del artículo 3º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 3º, antes 4º.

—Se lee el artículo 4º, antes 5º.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Señor presidente: quiero hacer una aclaración.

No voy a proponer una modificación, por cuanto plantearía una cuestión de tipo reglamentario que no es mi intención hacer en este momento, pues demoraría la sanción de esta ley que es tan necesaria y reclamada por nuestra sociedad. Pero debo formular una aclaración por un deber de conciencia.

En el artículo 5º de la sanción de la Cámara de Diputados se modifican varios artículos del Código Civil, entre ellos el 309. Allí, con muy buen criterio, la Cámara de Diputados ha salvado una omisión en que habíamos incurrido en la sanción de la Cámara de Senadores.

Este artículo del Código Civil se refiere a la suspensión del ejercicio de la patria potestad. La sanción de la Cámara de Diputados introdujo, como causa de la suspensión de dicho ejercicio, "la inhabilitación de alguno de los padres según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado".

El reparo que fórmulo es que no se ha incluido el inciso 3 del artículo 152 bis.

Este artículo menciona que podrá inhabilitarse judicialmente, y cita en el inciso 1º) "A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio"; en el inciso 2º) "A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio", y en el inciso 3º) "A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiese a su familia a la pérdida del patrimonio...".

Entiendo que si un padre es inhabilitado para administrar sus bienes por prodigalidad en los actos de administración y disposición, también corresponde que se lo suspenda en el ejercicio de la patria potestad, pues va a tener la administración de los bienes de sus hijos y si es prodigo con sus propios bienes, se le debe privar la administración de los bienes de los hijos.

No voy a insistir en esta cuestión porque no deseo que se produzca una cuestión de tipo reglamentario, pero dejo aclarado sobre este aspecto que lo correcto es hacer referencia al artículo 152 bis del Código Civil, sin mención de ningún inciso o citando los tres.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º, antes 5º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 5º a 21, inclusive, antes artículos 6º a 22, respectivamente.

—El artículo 22, antes 23, es de forma.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Brasesco.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Con motivo de la correlación del articulado, en razón de la enmienda efectuada al suprimir el artículo 3º, propongo que se autorice a la Presidencia para subsanar cualquier error de numeración proveniente de esa modificación.

—Asentimiento.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Como hay asentimiento, se procederá en la forma indicada por el señor senador por Entre Ríos.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Solicito que se deje constancia de que esta aprobación ha sido efectuada por unanimidad de la Cámara de Senadores.

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Quedará constancia, señor senador.

## 7

### MONUMENTO HISTORICO NACIONAL

**Sr. Presidente (Gómez Centurión).** — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor senador Gass, por el que se declara monumento histórico nacional a la finca La Elvira, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*):

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Interior y Justicia ha considerado el proyecto de ley del señor senador Gass, por el que se declara monumento histórico nacional a la finca "La Elvira", sita en la ciudad de Don Torcuato, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De conformidad con el artículo 102 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de septiembre de 1985.

*Celestino A. Marini. — Jorge D. Solana. — Manuel D. Vidal. — Deolindo F. Bittel.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase monumento histórico nacional a la finca "La Elvira", incluyendo su parque y construcciones, ubicada en el perímetro de las calles avenida Regina Paccini de Alvear, General Alvear y Diego, de la ciudad de Don Torcuato, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, en la que habitara el ex presidente de la Nación, doctor Marcelo Torcuato de Alvear.

Art. 2º — Encomiéndase a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, la conservación y el cuidado de la finca mencionada en el artículo anterior.

Art. 3º — Derógase la llamada "ley" 17.052.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Adolfo Gass.*